

Año VI Julio - Diciembre de 1938 Nos. 25 y 26

Artémio *Starc*

Revista de Derecho

SUMARIO

Héctor Brail R.	La interpretación de los contratos a través de la jurisprudencia Chilena	Pag. 1983
David Stitckin B.	Algunas consideraciones sobre el mandato para ejecutar actos solemnes	" 2039
Ramón Domínguez B.	La cuenta corriente mercantil ¿es un contrato consensual?	" 2053
Orlando Tapia S.	La responsabilidad extracontractual	" 2059 <i>I</i>
	MISCELANEA JURÍDICA	" 2085
	<i>(El delito de robo motivado)</i> JURISPRUDENCIA	" 2091
	JURISPRUDENCIA EXTRANJERA	" 2145
	LEYES Y DECRETOS	" 2159

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN (CHILE)

JURISPRUDENCIA

DE LA CORTE SUPREMA

**Sociedad Claro y Pérez Ltda.
QUIEBRA
Septiembre 5 de 1938.**

**Casación en el fondo=no ha lugar
Procedencia petición de Quiebra.
Créditos no exigibles**

DOCTRINA.—Para probar la concurrencia de car la declaración de quiebra títulos ejecutivos y vencidos. de un deudor comerciante basta que éste haya cesado en el pago de una obligación mercantil, derecho que puede ejercitar cualquiera de los acreedores, aun cuando su crédito no sea exigible, siempre que señale la causal que la justifica y los hechos que la constituyen, a diferencia de lo que ocurre con el deudor no comerciante o civil, respecto del cual la

Santiago, 5 de Septiembre de 1938.

Se ordenó traer el recurso de relación y considerando:

1.º) Que el fundamento primordial que se aduce para impugnar la sentencia de que se recurre consiste en que al revocarse la resolución del juez a quo que dió lugar o reponer la resolución que declaró la

quiebra de la Sociedad Claro y Pérez Ltda., el Tribunal del fondo procedió sin que se le hiciera valer créditos que dieran fe de un título ejecutivo cuando se trataba de un juicio ejecutivo de carácter universal y no de un declarativo;

2.º) Que la Ley de Quiebras N.º 4558, de 4 de Febrero de 1929, en el artículo 228 de su Título final derogó el Libro IV del Código de Comercio, que trataba de "De las Quiebras", así como también el párrafo cuarto del Título I del Libro III y el párrafo III del

Título XVI del Libro III del Código de Procedimiento Civil; de manera que siendo aplicables al caso solamente las disposiciones de la ley especial primeramente citada, es útil examinar previamente las que han servido para resolver la cuestión debatida en autos enfrente a las que fueron derogadas;

3.º) Que el artículo 1.º de dicha Ley ordena que el juicio de quiebra tiene por objeto realizar en un solo procedimiento los bienes de una persona natural o jurídica, sea o no comerciante, a fin de proveer al pago de sus deudas en los casos y en la forma determinada por la ley; esto es, se

procede a la "instrucción de una causa" con el objeto ya indicado; pero no termina ésta por una sentencia, sino que el procedimiento se desarrolla conjuntamente con la actuación de la Sindicatura de Quiebras, que es un organismo auxiliar de los Tribunales de Justicia establecida con el fin de administrar y realizar los bienes de las personas que caigan en falencia, liquidar y pagar sus deudas y desempeñar las demás funciones que le encomienda la misma ley;

4.º) Que, conforme lo faculta el artículo 37 de la propia ley, en su número 1.º, cualquiera de los acreedores podrá solicitar la declaración de quiebra, cuando el deudor comerciante cese en el pago de una obligación mercantil, sin que exista en la actualidad el "estado de quiebra" que, según la legislación anterior, se producía para el comerciante que cesaba en el pago de sus obligaciones mercantiles y que para constituir dicho estado no era menester que la cesación de pagos fuera general;

5.º) Que, por consiguiente, ahora basta también con que el deudor comerciante se encuentre en insolvencia, que es "la

incapacidad en que uno se halla de pagar alguna deuda", la quiebra del deudor no copara que uno o varios de sus acreedores pueda solicitar la declaración de su quiebra, o, para que el mismo deudor comerciante cumpla con la obligación que le impone el artículo 35 de solicitar la declaración de su quiebra antes de que transcurran quince días contados desde la fecha en que haya cesado en el pago de una obligación mercantil;

6.º) Que ahora como antes, para solicitar o provocar la declaración de quiebra no es necesario que sea exigible el crédito del acreedor petionario, y sólo se requiere que en la solicitud respectiva se señale la causal que la justifica y los hechos constitutivos de dicha causal; y, además, que se acompañen los documentos para acreditar los fundamentos de la petición, o que se ofrezcan las pruebas que correspondan; así como otrora había que especificar el hecho y circunstancias constitutivas de la cesación de pagos y acompañarse también documentos que la acreditaran y ofrecer rendir la prueba que conviniera;

7.º) Que, desaparecida la institución del "concurso de acreedores necesario o voluntario" y sustituida ésta, primero, por la quiebra del deudor no comerciante, la que para ser declarada es menester que existan en su contra tres o más títulos ejecutivos y vencidos, provenientes de las obligaciones diversas y estuvieren iniciadas a lo menos dos ejecuciones, y no hubiere presentado en todas éstas, dentro de los cuatro días siguientes a los respectivos requerimientos de bienes bastantes para responder a la prestación que adeude y las costas, es necesario examinar la situación que se produce para el deudor comerciante en insolvencia;

8.º) Que, en seguida, para la declaración de la quiebra del deudor comerciante basta que cese en el pago de una obligación mercantil; mientras que para provocar igual declaración respecto de un deudor no comerciante o civil la ley la rodea de seguridad y requiere la concurrencia de títulos ejecutivos y vencidos, respecto de los cuales procede la ejecución y el embargo por haberse cumplido el plazo para su pago;

9.º) Que, anticipadas las premisas precedentes, será el caso entrar a considerar las consecuencias que de ellas se desprenden a medida que se ana-

licen cada uno de los motivos de casación que constituyen el actual recurso;

10.º) Que el tribunal del fondo, para llegar a la conclusión de la que la sociedad Claro y Pérez Limitada no ha logrado establecer que no estuviese en cesación de pagos el día en que fué declarada en quiebra sien- ta los siguientes hechos: a) que la Sociedad fallida no rindió ninguna prueba para acreditar las excepciones puestas en su solicitud de reposición, salvo la de los dos documentos prove- nientes de la oficina de Con- trol de Cambios que acreditan que dicha Sociedad pidió dó- lares para efectuar un giro so- bre Nueva York y no dió nin- gún paso para comprar mone- das extranjeras con que pagar deudas exigibles en Chile; b) que no tachó de falsas las le- tras no protestadas personal- mente que le fueron puestas en su conocimiento en el curso de la instancia; c) que estaba en mora desde antes del 24 de Noviembre de 1931, y que res- pecto de todas las letras que se le cobraban, excepto las de fs. 51 a 83, había transcurrido el plazo legal del cual procedía efectuar su pago;

11.º) Que, producida la quie- bra de la persona jurídica, so-

ciudad comercial colectiva, que giraba bajo la razón de Claro Pérez Ltda. e iniciado en se- guida el actual procedimiento para efectuar el pago de sus deudas, no para otro fin que se haya objetado por la recu- rrente, resulta que no es ad- misible la infracción del artícu- lo 1.º de la ley 4558, tanto por esta razón cuanto porque no se expresa en el escrito de formalización la forma en que se habría producido tal infrac- ción ni la manera cómo ésta influiría en lo dispositivo del fallo;

12.º) Que, establecido el cese en el pago de las obligaciones mercantiles por parte de la so- ciedad deudora, por no haber- se pagado por ésta las respec- tivas letras de cambio que se hicieron valer en su contra den- tro del plazo en que procedía hacerlo, y solicitada la decla- ración correspondiente de quie- bra por acreedores suyos, y dic- tado el respectivo auto confor- me con el artículo 37 de la ci- tada ley 4558 carece de todo fundamento la alegación de la parte recurrente que, para man- tener el auto declaratorio de quiebra, es necesario que se hu- biera dictado en presencia de créditos que dieran fé de un título ejecutivo, cuando el re-

ferido artículo 37, que se supone infringido como segundo motivo de esta causal no exige la existencia de un título de tal naturaleza para poder establecer el cese en el pago de una obligación mercantil, demostración que se produce acompañando documentos para acreditar la petición y ofreciendo las pruebas que correspondan, conforme con el artículo 38, inciso primero de la misma ley, unido todo esto al celo que recomienda el artículo 39 al Juzgado, el que deberá cerciorarse por todos los medios a su alcance de la efectividad de las causales invocadas, ritualidades llenadas en autos por el Tribunal recurrido, según se lee en los considerandos 47 y 48 de su fallo, en los cuales para arribar a la conclusión de que la sociedad deudora no ha conseguido establecer que no estuviese en cesación de pagos el día en que fué declarada la quiebra, pondera la prueba producida al efecto expresando que, "lejos de mejorar la situación de Claro y Pérez Ltda., no logran otro objeto que afirmar la convicción del Tribunal en orden a que esta firma se encuentra en cesación de pagos"; y, si a estas consideraciones se agrega que los actos de comercio, que son generadores de las obligaciones que contraen los comerciantes entre sí, por regla general, se concluyen mediante propuestas verbales, que deben ser aceptadas en el acto de ser conocidas por la persona a quien se dirigieron, por propuestas escritas que deben ser aceptadas o desechadas dentro de un breve lapso, o por intermedio de corredores y que todas las operaciones mercantiles hay que asentarlas en el libro *Diario*, por orden cronológico y día por día, para que sirvan de prueba; la prueba de testigos es admisible en negocios mercantiles cualesquiera que sea la cantidad que importe la obligación que se trata de probar, y que con igual fin es posible servirse de la costumbre; de todo lo cual se infiere que la ley mercantil sólo para determinadas operaciones exige las formalidades de otorgamiento de escrituras públicas, de instrumentos, documentos o escritos, y ello se explica tanto por la buena fe de que se supone revestidos los actos de aquellos que hacen el comercio de profesión habitual cuanto por la facilidad y rapidez que el comercio necesita para concluir sus negocios y cumplir sus

compromisos; al revés de lo que ocurre en el campo de las actividades civiles en que la prueba de las obligaciones está sometida a norma de suyo estricta, como son las reglas que disponen que deberán constar por escrito los actos o contratos que contienen la entrega o promesa de una cosa que valga más de doscientos pesos; que al que demanda una cosa de más de doscientos pesos de valor no se le admitirá la prueba de testigos aunque limite a ese valor la demanda, etc.; de modo que, con los razonamientos antes expuestos, que es posible resumir en el concepto de que cuando se trata de la quiebra de un deudor no comerciante o civil, la ley exige la existencia de títulos ejecutivos y no los requiere para la del deudor comerciante, lo que demuestra, de acuerdo con lo expuesto en los artículos 38 y 39 de la ley 4558, se puede llegar a la conclusión de que el Tribunal fallador ha aplicado acertadamente la disposición legal en estudio, por lo que procede rechazar esta primera causai;

13.º) Que las alegaciones en que se funda la segunda causal de su recurso, generalmente, no guardan congruencia con

las infracciones que se suponen que afectarían a los artículos 38, 39, 49, 52, 53 y 59 de la Ley de Quiebras, porque no se ha producido quebrantamiento alguno del artículo 49, desde que la sociedad deudora no ejercitó el derecho concedido por esta disposición de consignar, dentro de los tres días siguientes a la notificación que declara la quiebra, fondos suficientes para el pago de los créditos que hubieran servido de base a la declaratoria, en cuyo evento el Juzgado debería de haber alzado la quiebra sin más trámites, porque, entablado por esta misma parte el recurso de reposición, que es el único admisible contra la resolución que declara la quiebra, y concluida la tramitación del incidente respectivo con la sentencia de alzada, carece de toda justificación la impugnación del artículo 52, porque, habiendo pedido la sociedad fallida al Tribunal dentro del plazo legal que se repusiera la resolución declaratoria de quiebra, procedimiento tramitado con

esta misma parte, con el Síndico y con la intervención de un coadyuvante, la sociedad Aurelio Valenzuela B. y Cía. Limitada, no se ha faltado a

Quiebra

2097

ninguna ritualidad que importe una errada aplicación del artículo 53, y porque, negada la reposición de la quiebra, por sentencia del Tribunal a quo contra la cual se dedujeron sendos recursos de casación en la forma y de apelación por las partes representadas por don Luis Naveillán, y la de don Aurelio Valenzuela B., que fueron concedidos para llegar después a la solución final dada a este incidente por el Tribunal sentenciador de revocar aquella resolución, declarando que se mantiene el estado de quiebra de la sociedad Claro y Pérez Limitada, se ha dado la interpretación que corresponde al artículo 59. Queda, por último, por hacerse cargo de las infracciones de los artículos 38 y 39 de la ley que nos ocupa, que se basan en que el juez al declarar la quiebra de dicha sociedad, sólo pudo tomar en consideración los créditos que servían de fundamento a la solicitud de declaración de quiebra, y en que el incidente de reposición se plantea sólo sobre tales créditos, por lo que el mismo juez no puede tomar en cuenta otros que se hacen valer después, argumentos que, para refutarlos, es suficiente atender que, si los jueces del fondo no pudieran aceptar las pruebas que se les ofrecieran en caso de no acompañarse documentos para acreditar los fundamentos de la petición de la quiebra que son capaces para formular los acreedores aun cuando sus créditos no sean exigibles, resultaría sin sentido el artículo 38, que está complementado con lo que dispone el artículo 59, que ordena al Juzgado pronunciarse sobre la solicitud de quiebra a la brevedad posible, con audiencia del deudor, si lo estima necesario, y le impone el deber de cerciorarse por todos los medios a su alcance de la efectividad de las causales invocadas; de donde se deduce que la magistratura goza para este efecto de mayor amplitud en el ejercicio de la facultad soberana de que están revestidos los jueces del fondo para apreciar la prueba, que llega hasta el extremo de autorizarla para poder suplir las deficiencias de las partes con el fin de descubrir la verdad; de manera que después de lo expresado se impone el rechazo de las infracciones de ley que se han examinado sobre esta causal;

14.º) Que, para provocar la declaración de quiebra, es ne-

cesario que el deudor comerciante haya cesado en el pago de una obligación mercantil, y que este derecho lo pueden ejercitar cualquiera de los acreedores aun cuando su crédito no sea exigible, a condición de señalar la causal que la justifica y los hechos constitutivos de dicha causal, y deberán acompañarse documentos para acreditar los fundamentos de la petición u ofrecerse las pruebas que correspondan; y el Juzgado se pronunciará sobre la solicitud a la brevedad posible, y deberá cerciorarse por todos los medios a su alcance de la efectividad de las causales invocadas, como ya se ha expuesto en el considerando anterior; y por consiguiente, para llegar a dictar la resolución que declara la quiebra, basta con que se acredite el cese en el pago de una obligación mercantil de parte del respectivo deudor; y sólo procede reponer dicha resolución cuando resulta que la causal alegada y los hechos que la constituyen no han sido acreditados con los documentos acompañados y con las demás pruebas ofrecidas; o, en otros términos, es procedente revocar aquella resolución cuando por el deudor se comprueba el hecho de no hallarse en mora en el pago de la obligación mercantil que se le reclama; sin que sea aceptable que se pretenda agravar o disminuir la responsabilidad del mismo deudor, como se sostiene en el recurso, en el sentido de que la obligación que se persigue debe ser líquida, pura y simple y actualmente exigible, en razón de que estas alegaciones no se dedujeron al formularse la solicitud de reposición; no se trabó la litis sobre este punto; ni tuvo para qué resolverse la sentencia recurrida, desde el momento que no hubo excepción alguna tendiente a enervar las acciones hechas valer en contra de la sociedad deudora sobre obligaciones que pudieran estar sujetas a plazo o condición o que no constara su existencia y cantidad o que no pudieran pedirse judicialmente desde luego, elementos que constituyen los requisitos que las obligaciones deben llenar para ser líquidas y exigibles. Por lo tanto, son improcedentes las infracciones de ley que se invocan en esta causal tercera y deben rechazarse por las razones expuestas:

15.º) Que, en cuanto a la violación de los artículos 1698 del Código Civil y 38 y 39 de la Ley de Quiebras, que impor-

Quiebra

2099

tan una transgresión de las atendida su solicitud dadas "las leyes reguladoras de la prueba escasas disponibilidades de ba, según el propio recurso es, cambio al alcance de la Comisión de observar que ninguna de las sión", y con los fundamentos tres disposiciones enunciadas 14.º), 15.º), 17.º) y 18.º) de ha sido violada en la especie la propia sentencia en que da y para llegar a este resultado por acreditada la cesación de es suficiente considerar que el pagos de la sociedad recurren-tribunal del fondo, en uso de te en mérito de los documentos las facultades que le son pri- tos que en ellos analizan; de vativas para apreciar la prueba donde se desprende que el pe- ba, sienta la conclusión de que tionario de la quiebra probó la sociedad Claro y Pérez Li- su acción, la existencia de las mitada no ha conseguido esta- obligaciones mercantiles adeu- blecer que no estuviese en- dadas por la referida sociedad cesación de pagos el día en que y que ésta no probó sus excep- fué declarada la quiebra y que- ciones tendientes a demostrar tiene la convicción de que esta que no se encontraba en "cesa- firma se encuentra en cesación- ción de pago" respecto de aqué- de pagos; todo lo cual guarda- llas, con lo que no es exacto perfecta conformidad con lo ex- que se haya cargado sobre la puesto en el considerando 11 firma fallida una prueba que de la sentencia reclamada, en- legalmente no le correspondía, el que se expresa que la única- cuando por el contrario, esta prueba rendida por el deu- parte no produjo más que la- dor para establecer la verda- prueba documental antes re- de los hechos que indica en la- cordada, y el actor logró alle- reposición, la constituyen los- gar las probanzas necesarias documentos de fs. 108 y 109, para el fin que perseguía, prue- el primero de los cuales sólo- ba aquilatada por los jueces acredita que dicho deudor pi- falladores, conforme con lo pre- dió a la comisión de Control- venido en los artículos 38 y de Cambios autorización para 39 de la Ley de Quiebras que un giro sobre Nueva York por han sido correctamente inter- 1.177 dólares americanos, y el- pretados; segundo es la respuesta que da 16.º) Que, respecto de las la misma Comisión, en la que objeciones que se formulen en se le dice que no puede ser el recurso sobre el carácter de

instrumento público que reviste el protesto de la letra, pero no la letra misma que seguiría siendo instrumento privado, en que se hacen consistir las violaciones de los artículos 1699 y 1700 del Código Civil y 456 del de Procedimiento Civil, reformado por el Decreto Ley 778 y por el artículo 33 del Decreto Ley N.º 407 de 17 de Marzo de 1925 que se dicen cometidos por el fallo de que se recurre, hay que tener presente que el protesto, es en la substancia para el caso, un requerimiento que se hace al que no quiere pagar una letra y un testimonio en que se hace constar la falta de pago de parte del aceptante; y que, elevado ahora este acto a la categoría de instrumento público, es un medio de prueba de aquella repulsa, que importa incurrir en el cese del pago de una obligación mercantil, y como tal instrumento público adquiere mayor fuerza cuando el protesto se verifica personalmente con el aceptante de la letra respectiva, en dicho evento no es necesario solicitar su reconocimiento para hacerlo valer en juicio si aquel no hubiere puesto tacha de falsedad de su firma al tiempo de protestarse el documento por falta de pago. El protesto en su calidad de instrumento público hace plena fé en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha; pero no en cuanto a las declaraciones que en él hayan hecho los interesados. Sin embargo, hace plena fé contra los declarantes, calidad que tiene para el caso el aceptante, respecto de quién la letra contiene la relación del requerimiento para que pague o exponga la razón por qué no pague, y la respuesta da, o la atestación de que ninguna se dió. En consecuencia, la sentencia recurrida al limitarse a establecer en sus fundamentos el valor de instrumentos públicos que da a los protestos de letras el artículo 33 del Decreto Ley N.º 407, de 17 de Marzo de 1935, y que su auto ha servido para acreditar el cese por parte de la sociedad deudora en el pago de una obligación mercantil que se denomina letra de cambio, y las consecuencias jurídicas que se derivan de ese concepto cuando dichos protestos se verifican personalmente, no ha transgredido ninguna de las disposiciones legales antes indicadas, sino que las ha aplicado en uso de las facultades que son propias de los jueces del fondo

para apreciar la prueba, y que la extranjera de la Comisión la Corte de Casación no puede de Control de Cambios y que de reveser; se hallaba en mora desde antes

del 24 de Noviembre de 1931,

17.º) Que cualesquiera que de manera que respecto de to- sean las formas de los endo- das las letras de que se trata, sos puestos en las letras de ex- cepto de las que se copian cambios transmitidas por este en las actas de fs. 51 y 83, medio a "The National City había transcurrido el plazo den- Bank", ellos no constituyen vio- tro del cual procedía efectuar laciones de los artículos 658 y su pago, como lo establecen los 661 del Código de Comercio, fundamentos 40, 41 y 42 de la porque carecen de influencia sentencia reclamada; y, siendo en lo dispositivo del fallo; to- extraña al debate toda alega- da vez que invocadas como fun- ción de culpa o de caso for- damentos de la cesación de pa- tuito, resultan también inacep- gos, de la firma Claro y Pérez tables las infracciones de los Limitada, no son las letras a artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de que ellos se refieren los únicos la ley N.º 4973, de 30 de Ju- medios probatorios aquilatados lio de 1931 y 1547 del Cód- por el tribunal sentenciador pa- go Civil, constitutivas de la úl- ra mantener la quiebra de la tima causal de casación, for- sociedad nombrada; y malizada en el actual recurso.

18.º) Que, por fin, en lo que Per estos fundamentos, y se dice relación con las letras visto también lo que previenen extendidas en dólares america- los artículos 938, 939, 941, 961 nos, que en el recurso se re- y 980 del Código de Procedi- chazan por no ser exigibles y miento Civil, se declara que no liquidas, son hechos de la cau- ha lugar al recurso de casación sa que la sociedad fallida no en el fondo, anunciado contra dió ningún paso para cumplir la sentencia dictada por una de con esas obligaciones, pues, no las salas de la Corte de Ape- solicitó la mencionada mone- laciones de Santiago, con fe-

2102

Revista de Derecho

cha 2 de Noviembre de 1938, Publiquese. Devuélvanse.
corriente a fs. 616, con costas Redacción del señor aboga-
en que se condena solidaria- do integrante don Ruperto Alá-
mente a la parte que interpuso mos.
el recurso y al abogado que Firman: *Novoa.— Fontecilla.*
aceptó su patrocinio. — *Carvajal Arrieta.— Juan B.*
Aplicase a beneficio fiscal, *Ríos.— E. Frazo.— Ruperto*
etcétera. *Alamos.— Alberto Cumming.*
